

D.A. 240/2026.

KAREN LETICIA DE ÁVILA LOZANO.

ELIAS ELIAS BROWN GUERRERO.

Ciudad de México. Sentencia del **Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, celebrada en **sesión ordinaria** de trece de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS para resolver los autos del amparo directo
D.A. 240/2026; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido el tres de enero de dos mil veinticinco, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ***** ** ***, por

“III.- AUTORIDAD RESPONSABLE:

IV.- ACTO RECLAMADO:

Lo constituye la sentencia definitiva de once de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por los **CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA OCTAVA PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**, en autos del juicio contencioso administrativo, bajo el número de expediente 13306/22-17-08-7, mediante la cual, se determinó reconocer la validez de la resolución impugnada, tenemos que el acto reclamado es inconstitucional, ya que la autoridad responsable suplió la carga procesal que le correspondía al tercero interesado CFE DISTRIBUCIÓN, en acreditar la actividad administrativa irregular y realizó una incorrecta valoración de las pruebas desahogadas en el juicio de nulidad y no realizó una correcta interpretación al artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y a su vez, considera que el suscrito no presenta ningún daño.”

SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Tribunal Colegiado, donde se registró con el toca **D.A. 175/2025**, y por acuerdo de su presidente de diecinueve de febrero del dos mil veinticinco, se admitió a trámite, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera



D.A. 240/2026

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

interesada, Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Bajío, Guanajuato, y se puso el expediente a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento legal.

TERCERO. Mediante auto de presidencia del diecinueve de marzo del dos mil veinticinco, se ordenó turnar el asunto a la secretaria en funciones de magistrada Zaira Denisse Ortega Martínez, para realizar el proyecto de resolución respectivo.

CUARTO. Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre del dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que en sesión celebrada al doce de septiembre de dos mil veinticinco, el Pleno del Órgano de Administración Judicial, mediante ***“Acuerdo General AG-POAJ-008/2025, por el que se adscriben a las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, re ubican y readscriben a las personas funcionarias de los órganos jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias***

En virtud de lo anterior, se ordenó retornar el asunto al magistrado José Luis Cruz Álvarez, para los efectos del artículo 183 de la Ley de Amparo.

QUINTO. En sesión de cuatro de diciembre del dos mil veinticinco, el pleno de este tribunal colegiado no aprobó el proyecto de resolución propuesto, y al no alcanzar la mayoría en esa misma fecha se retornó a la magistrada Karen Leticia de Ávila Lozano.

SEXTO. En sesión de quince de enero del dos mil veintiséis, el pleno de este tribunal colegiado resolvió conceder la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes:

“a) La sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar,



b) Dikte una nueva resolución, en la cual considere que se encuentra acreditado el daño personal (integridad física) y moral de la parte actora; verifique si se encuentra demostrado la actividad irregular de la Comisión Federal de Electricidad, partiendo de la base de que es a ésta a quien le corresponde la carga probatoria de desvirtuar la irregularidad de su actuar, y prescindiendo del hecho de que no está probado si el lugar donde ocurrió el suceso tenía acceso a personas, por medio de una puerta, rampa o escalera permanente; y una vez hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda acerca del nexo causal.”

SÉPTIMO. El doce de febrero del dos mil veintiséis, la Octava Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó una nueva resolución en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada y reconoció el derecho de la parte actora a la indemnización.

OCTAVO. En resolución de doce de marzo del dos mil veintiséis, este tribunal colegiado declaró cumplida la ejecutoria de quince de enero de la presente anualidad.

NOVENO. Inconforme *** ** *** ***** *******

*****), con la resolución de doce de febrero del dos mil veintiséis, dictada por la Octava Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el

DÉCIMO. Por conocimiento previo correspondió conocer del asunto a este Tribunal Colegiado, donde se registró con el toca **D.A. 240/2026** y por acuerdo de su presidente de veintisiete de abril de dos mil veintiséis, se admitió a trámite, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, Comisión Federal de Electricidad, división de Distribución Bajío, Guanajuato, y se puso el expediente a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento legal.

DÉCIMO PRIMERO. En acuerdo de veintiocho de mayo del dos mil veintiséis, se tuvieron por formulados los alegatos de la tercero interesada.

DÉCIMO SEGUNDO. Encontrándose el presente asunto en estado de resolución, por acuerdo de tres de junio de dos mil veintiséis, se ordenó turnar el asunto a la magistrada Karen Leticia De Ávila Lozano, para los efectos del artículo 183 de la Ley de Amparo; y,



CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este tribunal es legalmente competente para conocer del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 35, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se promueve contra una sentencia definitiva dictada por un Tribunal Administrativo, quien reside en la circunscripción donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional.

SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado se acreditó con el informe justificado suscrito por la magistrada presidenta de la Octava Sala Regional Metropolitana (ahora Octava Sala Regional en la Ciudad de México) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que obra a foja 2 del expediente en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178, fracción III, de la Ley de Amparo, y con los autos originales

TERCERO. Legitimación. El juicio de amparo se promovió por parte **legítima**, toda vez que la ahora parte quejosa, ***** , fue quien promovió el juicio contencioso administrativo.

Por lo que el plazo transcurrió del **veinticinco de febrero al dieciocho de marzo del mismo año**, si se toma

SEXTO. Consideraciones previas. Los conceptos de violación son en una parte **inoperantes** e **infundados** y por la otra **fundados**, de conformidad con las consideraciones siguientes.

6.1. Antecedentes.

Para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario aludir a los antecedentes más relevantes del asunto y que se desprenden del expediente del juicio contencioso administrativo 13306/22-17-08-7, del índice de la Octava Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

1. ***** ** *** ***** ***** , señaló que el uno de junio del dos mil veinte, aproximadamente a las veinte horas, se encontraba en la azotea de su domicilio realizando actividades propias del hogar como recoger ropa que había lavado, cuando de repente recibió una descarga eléctrica por parte de unas líneas de media tensión, conductoras de energía eléctrica, pertenecientes a Comisión Federal de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Electricidad Distribución.

2. Señaló que las líneas conductoras de energía pasan suspendidas por el aire, muy cercanas al límite del inmueble donde ocurrió el siniestro, por lo que la energía hizo un arco eléctrico alcanzando su cuerpo y lanzándola tres metros sobre la azotea en la que se encontraba, provocándole un fuerte golpe en la cabeza y quedando inconsciente.

3. Refirió que derivado de la electrocución, presentó quemaduras en gran parte de su cuerpo, las cuales le impiden hacer su vida normal, pues ya no puede realizar actividades que requieran esfuerzo, ni trabajar, como tampoco exponerse al sol, lo cual limita continuar con su vida que llevaba hasta antes del accidente, entre otras secuelas.

4. Derivado de la anterior, el quince de octubre del dos mil veintiuno, ***** ** ***, ante el Departamento de Asuntos Jurídicos de la División de Distribución Bajío de CFE presentó reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado por actividad irregular.

“PRIMERO.- Esta autoridad resultó competente para conocer y resolver esta reclamación.

TERCERO.- ***** ** *** ***** *****

CUARTO.- Dese salida a la reclamación en el libro de registro de esta autoridad, aviso al superior respectivo por medio de estadística y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido.

6. El seis de junio del dos mil veintidós, ***** ** **

ELIAS ELIAS BROWN GUERRERO
70666206366533000000000000000000159F3
29/04/29 09:40:32



7. La demanda quedó radicada en la Octava Sala Regional Metropolitana (ahora Octava Sala Regional en la Ciudad de México) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se registró bajo el expediente 13306/22-17-08-7; mediante acuerdo de veintiuno de junio del dos mil veintidós, se admitió a trámite y el catorce de noviembre siguiente, se tuvo por ampliada la demanda.

8. Una vez agotado el procedimiento contencioso administrativo, la sala dictó sentencia el once de noviembre de dos mil veinticuatro, en cuya parte resolutive reconoció la validez de la resolución impugnada.

9. ***** , inconforme con aquella resolución, por escrito recibido el tres de enero de dos mil veinticinco, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promovió juicio de amparo directo.

11. Una vez seguido el juicio, en sesión de quince de enero del dos mil veintiséis, el pleno de este tribunal colegiado resolvió conceder la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes:

b) Dikte una nueva resolución, en la cual considere que se encuentra acreditado el daño personal (integridad física) y moral de la parte actora; verifique si se encuentra demostrado la actividad irregular de la Comisión Federal de Electricidad, partiendo de la base de que es a ésta a quien le corresponde la carga probatoria de desvirtuar la irregularidad de su actuar, y prescindiendo del hecho de que no está probado si el lugar donde ocurrió el suceso tenía acceso a personas, por medio de una puerta, rampa o escalera permanente; y una vez hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda acerca del nexo causal.”

12. Mediante sentencia de doce de febrero del dos mil veintiséis, la Octava Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declaró la



nulidad de la resolución impugnada y reconoció el derecho de la parte actora a la indemnización.

13. En resolución de doce de marzo del dos mil veintiséis, este tribunal colegiado declaró cumplida la ejecutoria de quince de enero de la presente anualidad.

14. Inconforme ***** ** ** ***** ***** *****

con la resolución de doce de febrero del dos mil veintiséis, dictada por la Octava Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promovió el presente juicio de amparo directo.

6.2 Síntesis de la sentencia reclamada.

La sala señaló que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del D.A. 175/2025, los argumentos planteados por la parte actora resultaron fundados.

Destacó que la *litis* consistió en determinar si el accidente sufrido por la actora el día uno de junio del dos mil veinte fue consecuencia de una electrocución provocada por

Indicó que la actora acreditó el daño ocasionado a su integridad física y que las lesiones que sufrió constituyen un daño real evaluable en dinero, para efectos de una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado.

ELIAS ELIAS BROWN GUERRERO
7066620636d6533000000000000000000159f3
29/04/29 09:40:32



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Agregó que la actora señaló sufrir daño moral derivado de la electrocución, porque la colocación de los cables propiedad de la CFE no cumplía con las normas oficiales mexicanas.

Destacó que bastaba con que hubieran quedado demostrado el evento lesivo y el carácter afectado, como sucedió en el caso, para que operara la presunción y se tuviera por probado el daño moral.

La sala determinó que correspondía al Estado probar, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios, y que estos no fueron consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

Carga procesal que no se cumplió por parte de la demandada, ya que en todo caso le correspondía acreditar, a través de alguna prueba eficaz que su actuar fue apegado a la normativa, esto es, que el cableado estaba correctamente colocado y que la instalación eléctrica cumplía con lo dispuesto en la normativa en que la actora sustentó sus

Por tanto, correspondía al propio ente estatal acreditar que atendió a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración en la atención de las condiciones de seguridad necesarias en el tendido eléctrico.

Advirtió que el nexo causal se concibió como un conector capaz de asociar dos o más eventos en una relación causa-efecto de correspondencia, basado en el principio de razón suficiente; y atendiendo a ello, estimó que sí existió una adecuación entre acto y evento, por lo que resultaba procedente la indemnización correspondiente, al ser una causa próxima y verdadera del daño infringido, resultando fundada la pretensión de la actora, por lo que debía declararse la nulidad de la resolución impugnada, al haber omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes que afectaron las defensas de la demandante.

Por estar relacionados, se procede a estudiar de manera conjunta los cuatro conceptos de violación, en donde la parte quejosa aduce que:

- Contrario a lo resuelto en el acto reclamado, sí existen elementos para calcular el monto de la indemnización que corresponde pagar a la víctima; por lo que, se debe conceder el amparo para efecto de dejar insubsistente el acto



- De obligar a la demandante a acudir nuevamente a ofrecer pruebas y desahogarlas para acreditar los extremos de sus pretensiones, resultaría en una trasgresión al derecho a la tutela judicial efectiva, reconocida en el artículo 17 constitucional, pues se le daría nuevamente la oportunidad a la autoridad administrativa de ofrecer y desahogar pruebas para desvirtuar el derecho ya adquirido en juicio.

- La sala transgrede los principios de legalidad, expeditez, seguridad jurídica y debido proceso, al omitir establecer condena liquida de las prestaciones demandadas y, por ende, no haber entrado al estudio del fondo del asunto como era su obligación, en atención al principio de mayor beneficio.

- La sala debió entrar al estudio de fondo y resolver si se acreditaba o no la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que la actora ofreció y desahogó las pruebas suficientes para demostrar su acción; por lo que, la

- La responsable actuó sin atender su obligación de analizar el fondo del asunto y, en su caso, reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa, es decir, al pago de la indemnización correspondiente, en términos del artículo 51, párrafo penúltimo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

- Al reponer el procedimiento hasta sede administrativa, le da nueva oportunidad a la autoridad demandada para aportar pruebas que estaba en oportunidad de ofrecer, según el artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y fue omisa en ello.

- La sala transgredió su derecho fundamental a recibir una tutela judicial efectiva, al omitir el principio *pro persona*; ya que, a pesar de contar con todos los elementos necesarios para dictar una sentencia de fondo, ordena, en etapa de ejecución de sentencia, la apertura de un incidente



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

para establecer condena en cantidad líquida, dándole a la autoridad responsable una nueva oportunidad de pronunciarse sobre la pretensión aducida.

- La sentencia transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, al ser una sentencia para efectos y, en consecuencia, retardar con ello la impartición de justicia; lo cual es ilegal al no aplicar el artículo 50-A, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
- Tanto la valoración del daño o perjuicio ocasionado con motivo de una actividad estatal irregular, como la determinación del monto de indemnización, son elementos inherentes y esenciales de la sentencia, por disposición expresa del artículo 50-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Dichos planteamientos son en una parte **inoperantes** e **infundados** en otra.

La **inoperancia** resulta, toda vez que ciertos argumentos parten de premisas falsas.

Sin embargo, de la sentencia reclamada, no se advierte que la sala hubiera determinado reponer el procedimiento; al contrario, resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada y, estableció que sí se acreditó el daño sufrido por la hoy quejosa, la actividad irregular por parte del Estado y el nexo causal entre esas dos cuestiones; así como, la procedencia de la indemnización correspondiente.

De modo que los argumentos en análisis, van encaminados a controvertir cuestiones ajenas a la *litis* que la sala no consideró para dictar el fallo.

Lo anterior, tiene apoyo por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), emitida por la entonces Segunda Sala



de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.” (Registro digital: 2001825. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, página 1326. Tipo: Jurisprudencia.)

Por otra parte, resultan **infundados** los demás planteamientos relativos a que la sala omitió cuantificar injustificadamente el monto de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado y que se le dio una nueva oportunidad a la demandada para ofrecer y desahogar pruebas con el fin de desvirtuar el derecho ya adquirido en juicio al establecer que la cuantificación de la indemnización debía realizarse en la vía conducente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 214/2018, analizó la procedencia del **incidente de liquidación** cuando no se tengan elementos

El máximo tribunal determinó que el hecho de que el artículo 50-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece la obligación de determinar en la sentencia respectiva el monto de la indemnización, tratándose de un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, **no significa que, necesariamente, la indemnización respectiva deba contenerse en ese documento.**

Lo anterior, en virtud de que, a fin de estar en aptitud de precisar el monto correspondiente es necesario que la sala cuente con los elementos probatorios indispensables para tal efecto, pues no debe perderse de vista que la indemnización **ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso.**

En tal virtud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que cuando en el juicio contencioso administrativo no



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

se tengan los elementos necesarios para determinar el monto indemnizatorio en la sentencia respectiva, es procedente que reconozca el derecho a la indemnización y se reserve la cuantificación de ese aspecto en la vía incidental, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de dar efectivo cumplimiento al **derecho sustantivo establecido en el anterior artículo 113, ahora 109**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de restituir los daños causados por el actuar administrativo irregular.

Determinó que, estimar lo contrario, esto es, que únicamente puede establecerse en la sentencia la cuantificación de la indemnización a la que tiene derecho un particular que acreditó en el juicio contencioso administrativo la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa irregular del Estado y la lesión producida, implicaría hacer nugatorio el derecho de los particulares de recibir la indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Aclaró que en relación al incidente de liquidación, debe precisarse que la cuestión a dilucidar consiste en **determinar la cantidad líquida a que asciende el monto indemnizatorio**, derivado de la condena contenida en la sentencia por la acreditación de la actividad irregular del Estado, el daño causado y la relación causal entre éstas; de manera que existe la pretensión que **no versa ya sobre la existencia de la responsabilidad patrimonial** del Estado, **sino sobre la cuantía de la indemnización**.

Sostuvo que el incidente de liquidación es autónomo respecto del juicio principal, pues su resolución **no altera el reconocimiento del derecho respectivo contenido en la**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

sentencia, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal; y de hecho, la procedencia de la acción incidental depende de que previamente exista condena a la autoridad demandada por haberse acreditado la responsabilidad patrimonial, **que pretende perfeccionarse mediante su liquidación.**

Señaló que, de conformidad con el artículo 39, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los incidentes se sustanciarán corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de tres días y con el escrito por el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, **se ofrecerán las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e interrogatorios de testigos y peritos.**

De igual forma, refirió el máximo tribunal que esta temática ya había sido materia de pronunciamiento por parte de la Segunda Sala, al resolver el **amparo directo 18/2015**, en donde sostuvo que, al no existir desahogadas ante la autoridad responsable pruebas suficientes para realizar el cálculo correspondiente a la indemnización por daño moral ni

De la contradicción de tesis a la cual se ha hecho referencia, derivó el criterio jurisprudencial 2a./J. 60/2019 (10a.), de rubro y texto siguientes:

Una vez acreditada la existencia de la relación de causalidad entre el daño producido al gobernado y la actividad administrativa irregular desplegada por la autoridad demandada, lo procedente dentro del juicio contencioso administrativo, es fijar el alcance del monto que, por concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, corresponde. Sin embargo, si de la revisión integral del expediente no se advierten los elementos necesarios para su individualización, es necesario que se tramite un incidente de liquidación conforme a lo dispuesto por el artículo 39, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuya sustanciación y resolución no puede exceder del plazo de 90 días, a fin de dar un efectivo cumplimiento al derecho sustantivo establecido en el precepto 113 –actualmente 109– de la



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de restituir los daños causados por el actuar administrativo irregular.” (Publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 1506, con registro ius 2019925.)

Criterio que resulta aplicable, no solo para la sala que dictó la sentencia impugnada, sino también para este tribunal colegiado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

Conforme a lo analizado por el máximo tribunal, es correcto que la cuantificación de la indemnización no se realice en la propia sentencia en donde se determinó la existencia de la actividad irregular del Estado, sino posteriormente en un incidente de liquidación, cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no cuente con suficientes elementos para poder cuantificar la indemnización, y dado que dicha instancia procesal está limitada únicamente a la cuantía de la indemnización, sin alterar el reconocimiento del derecho respectivo contenido en la sentencia, está justificado el ofrecimiento y desahogo de pruebas.

Ahora bien, con el fin de verificar si en efecto la sala no contaba con los suficientes elementos para cuantificar, de conformidad con la jurisprudencia citada, procede analizar las

"I. PRESTACIONES:

***** , consistentes en

B).- El reconocimiento de que se me ocasionaron daños y perjuicios de índole material y moral por las lesiones graves e irreversibles de la suscrita ***** ** **

A consecuencia de lo anterior:

D).- El pago de una indemnización por concepto de lucro cesante y daño emergente, derivado de los daños y perjuicios ocasionados al reclamante, indemnización que me corresponde, en virtud de que no tenía la obligación jurídica de soportar, por no existir fundamento legal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

E).- El pago de una indemnización por concepto de daño moral al actor a consecuencia de las lesiones graves e irreversibles sufridas por la suscrita ***** ** ***

F).- El pago de los intereses moratorios respecto de las cantidades que se determinen por todos y cada uno de los anteriores conceptos, computados a partir de que acaeció el siniestro por la actividad irregular del Estado y hasta que se determine por autoridad competente el monto de la indemnización integral por las lesiones graves e irreversible, corolario, una incapacidad parcial permanente de la suscrita ***** ** ** ***** *****

G).- La actualización del importe de la indemnización integral conforme al Código Fiscal de la Federación, una vez que sea determinado por la autoridad competente.

$$(\dots)''$$

De la transcripción anterior, se advierte que la parte actora solicitó la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado de forma integral, el pago por daños materiales y morales, daño emergente y lucro cesante.

De las pruebas aportadas por la reclamante se advierten acta de nacimiento de la actora, expediente médico de un sanitario particular y los dictámenes del perito de la parte actora en materia de psicología, traumatología y ortopedia, y de energía eléctrica.

De lo resuelto en la sentencia impugnada este tribunal puede concluir que, existe la certeza de que quedó

Es decir, no hay duda de que quedó acreditada la responsabilidad patrimonial del Estado y se reconoció que la parte actora tienen derecho al pago de la indemnización correspondiente a que hace referencia el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y el hecho de que la sala resuelva lo relativo a la cuantificación de la indemnización en la etapa de cumplimiento, a través de un incidente de liquidación, no afecta dichos derechos reconocidos.

La tramitación del incidente de liquidación se encuentra justificada por las siguientes razones:

Cabe precisar que el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, señala lo siguiente:



“ARTÍCULO 14.- Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma:

1. En el caso de daños personales:

a) Corresponderá una indemnización con base en los dictámenes médicos correspondientes, conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo, y

b) Además de la indemnización prevista en el inciso anterior, el reclamante o causahabiente tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que en su caso se eroguen, de conformidad con la propia Ley Federal del Trabajo disponga para riesgos de trabajo.

II. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil Federal, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante.

La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada reclamante afectado, y

III. En el caso de muerte, el cálculo de la indemnización se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil Federal en su artículo 1915.”

El artículo prevé la forma en que se calcularán los montos, dependiendo del tipo de daño del que se trate; la primera fracción prevé los daños personales (incluyen gastos médicos), la II el daño moral; y, la III cuando existe muerte (lucro cesante y daño emergente).

De conformidad con la jurisprudencia 2a. LIV/2015 (10a.) publicada en el semanario judicial de la federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1080, con registro ius 2009487 de rubro “*RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PARÁMETROS PARA CUANTIFICAR EL DAÑO MORAL CAUSADO POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR*”, para determinar la indemnización por daño moral correspondiente, se deben considerar 4 factores: (I) el tipo de derecho o interés lesionado; (II) el grado de responsabilidad; (III) la situación económica de la responsable y de la víctima; y, (IV) otros factores relevantes del caso.

RELATIVO A LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
ENGLOBA PARTICULARIDADES QUE PUEDEN GUARDAR
RELACIÓN CON ALGUNO DE LOS OTROS
PARÁMETROS.”

Sin embargo ello es únicamente para el cálculo o determinación del daño moral, más no así para el daño personal.

La fracción I del artículo 14 del citado ordenamiento legal, establece que la indemnización por daño personal se hará con base en los dictámenes médicos correspondientes, conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo, ello claro, siempre y cuando, exista una relación laboral, esto es, que la hoy quejosa tuviera un trabajo regular al momento en que sucedió el hecho lesivo; pues de lo contrario, se deberán exhibir otros elementos que sirvan de parámetro para cuantificar.

Pues no se debe perder de vista que, la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que dicho dispositivo legal era inconstitucional. Sin que pase



Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 2a. XXXI/2018 (10a.), cuyo rubro y texto son:

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE DEFINE LOS PARÁMETROS DE INDEMNIZACIÓN, ES INCONSTITUCIONAL CUANDO ES APLICADO A UN MENOR DE 15 AÑOS. El precepto citado señala que los montos de las indemnizaciones en el caso de daños personales se calcularán conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo, lo que limita por consecuencia la posibilidad de

Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 36/2025 (11a.), de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé:

ELIAS ELIAS BROWN GUERRERO
706a6520636a6b330000000000000000000159f3
29/04/29 09:40:32



NO ESTÉ ACREDITADA LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE SUS PADRES.

Hechos: Los padres de una persona menor de edad reclamaron al Instituto Mexicano del Seguro Social la indemnización por negligencia médica que le provocó ceguera permanente. Al no existir respuesta de la autoridad, demandaron la negativa ficta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que determinó que existió responsabilidad patrimonial del Estado y condenó al Instituto a pagar diversas cantidades por concepto de daño personal y moral. Inconformes con los montos, los padres promovieron amparo directo que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Argumentaron que fue incorrecto que la Sala calculara la indemnización por daño personal con base en la Unidad de Medida y Actualización en lugar de considerar el salario mínimo.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el salario mínimo es el referente adecuado para calcular la indemnización por daño personal ocasionado a una persona menor de edad por la actividad irregular del Estado, cuando no exista evidencia de la cantidad que perciben los padres por concepto de ingresos diarios.

Justificación: La metodología empleada para calcular la indemnización por daño personal, prevista en el artículo 14, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cuando las víctimas son personas que no trabajan –como las infancias–, **debe partir de elementos diversos a los laborales**. En estos casos no procede tomar el salario del trabajador como base para calcular la indemnización por daño personal, sino que deben considerarse los alimentos que corresponden a la persona menor de edad. De acuerdo con el artículo 564 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para calcular los alimentos cuando no esté acreditada la capacidad económica de los padres, debe tomarse en cuenta el salario mínimo vigente en el momento en que se realice el cálculo, al ser el referente adecuado para determinar la pensión alimenticia.” (Publicada en el Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 1, página 1108, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Registro digital: 2030879.)

De modo que, con los datos y pruebas existentes en autos, la sala podría evaluar los elementos a considerar para

Asimismo, no existe prueba para acreditar las demás prestaciones solicitadas por la persona quejosa desde el escrito de reclamación inicial, como los **daños emergentes**, consistentes en lucro cesante.

Si la sala determinara la cuantificación con los elementos con que cuenta –*sin tramitar el incidente*–, podría llegar a un monto incorrecto por lo que hace al daño personal por no contar con todos los elementos, y dejaría fuera los demás conceptos, de los cuales debe allegarse la sala **en beneficio de la parte quejosa**, lo cual, de conformidad con lo establecido por el máximo tribunal en la contradicción de tesis 214/2018 y jurisprudencia 2ª/J 60/2019 (10ª) puede hacer y está jurídicamente justificado.

En el caso, la tramitación del incidente de liquidación **no perjudica a la parte quejosa**, al contrario, le beneficia, precisamente para poder atender debidamente **todas y cada una de las prestaciones que fueron reclamadas desde el**



escrito de reclamación y establecer una indemnización
justa.

Por tal motivo es que resulta procedente la tramitación del incidente de liquidación, por lo que, los argumentos de la quejosa resultan **infundados**.

Similar criterio se tomó en el amparo directo D.A. 77/2026, en sesión de cuatro de junio del dos mil veintiséis, de la ponencia del magistrado José Luis Cruz Álvarez.

6.3.1. Argumentos relativos a la omisión de la sala de ordenar la tramitación del incidente de liquidación en la sentencia reclamada.

Resulta **fundado**, una parte del primer concepto de violación, atendiendo la causa de pedir; con respecto a que, la sala dejó la cuantificación de la indemnización a la tramitación de un incidente de ejecución futuro e incierto, dado que está condicionado a la aprobación de aquélla.

“(..)

Ahora bien, el hecho de que la norma transcrita establezca la obligación de determinar en la sentencia respectiva el monto de la indemnización, tratándose de un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, no significa que necesariamente, la indemnización respectiva deba contenerse en ese documento.

Lo anterior, pues a fin de estar en aptitud de precisar el monto correspondiente, es necesario que la Sala cuente con los elementos probatorios indispensables para tal efecto, sin que esta Juzgadora cuente con ellos, pues no debe perderse de vista que la indemnización ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso atendiendo entre otras cuestiones, a lo siguiente: a) el daño físico o mental; b) la pérdida de oportunidades, en particular, las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) los perjuicios morales; e) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales; a fin de que se cumpla con el derecho a una justa indemnización.

Es el caso, que no se cuenta con datos aportados por la propia demandante para determinar cuantitativamente ninguno de los elementos antes precisados, a fin de estar en posibilidad de determinar el monto indemnizatorio que en su caso correspondiese, **por lo que es procedente reconocer el derecho a la indemnización, y quede expedito el**



derecho para la cuantificación de ese aspecto, mediante la vía conducente.

Consecuentemente, al actualizarse en este asunto las causales de ilegalidad previstas en el artículo 51 fracciones II y III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivadas del acreditamiento de la actuación irregular del Estado, con fundamento en el diverso numeral 50-A del mismo ordenamiento legal, se reconoce el derecho a la indemnización, y toda vez que no se desprende dato alguno que pueda tomarse en consideración para determinar el importe del daño personal sufrido por la enjuiciante, ya que del dictamen ofrecido por ésta, no se cuantificó el importe con base en los riesgos de trabajo previstos en la Ley Federal del Trabajo vigente en esa época, se anula la resolución combatida, reconociendo el derecho a la indemnización señalado.

$$(\dots)''$$

De lo anterior se advierte que, si bien, como quedó precisado, resulta legal que la sala no haya cuantificado la indemnización en la sentencia recurrida por no contar con todos los elementos para ello; también lo es que, fue incorrecto que haya dejado expedito el derecho de la parte actora de solicitar la cuantificación en la vía conducente.

Pues como quedó precisado, la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo 18/2015, sostuvo que al no existir desahogadas ante la sala responsable pruebas suficientes para realizar el cálculo correspondiente a la indemnización, en un

En ese sentido, la sala responsable no debió dejar expedito el derecho de la parte actora para solicitar la cuantificación de la indemnización en la vía correspondiente, sino que debió ordenar la apertura del incidente de liquidación.

ELIAS ELIAS BROWN GUERRERO
7066620636d6533000000000000000000159f3
29/04/29 09:40:32



Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2018276, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes:

“ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por

6.4. Consecuencias del amparo.

1. Deje insubsistente la sentencia de doce de febrero del dos mil veintiséis, dictada en el juicio contencioso administrativo 13306/22-17-08-7; y

2. En su lugar, emita otra en la cual reitere los aspectos que no fueron motivo del amparo, y ordene la apertura del incidente de liquidación a fin de que se lleve a cabo la cuantificación de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado.

SÉPTIMO. Requerimiento de cumplimiento.



Con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere a la sala responsable para que dentro del plazo de diez días, informe sobre el cumplimiento del fallo protector, remitiendo copia certificada por duplicado de la resolución que dicte, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a los magistrados integrantes una multa a cada uno, en términos del artículo 258 de la Ley en cita (que será de cien a mil valores diarios de Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto por los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis), asimismo, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Por lo expuesto y fundado, se

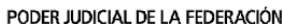
RESOLVE:

***** ** *** ***** ***** ***** , contra la sentencia

de doce de febrero del dos mil veintiséis, dictada por la Octava Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 13306/22-17-08-7, por vicios de fondo.

NOTIFÍQUESE; y con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la Sala de origen; y, en su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa.

Así, por **unanimidad de votos** de los magistrados **José Luis Cruz Álvarez**, Presidente, **Karen Leticia De Ávila Lozano** y **Ricardo Gallardo Vara**, lo resolvió este



SE HACE CONSTAR QUE ESTA FOJA CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS, EN EL AMPARO DIRECTO **D.A. 240/2026**, INTERPUESTO POR ***** ** ** ***** RELATIVO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 13306/22-17-08-7, DEL ÍNDICE DE LA OCTAVA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

EN LA SESIÓN CELEBRADA CON ESTA FECHA SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PROYECTO FORMULADO POR LA MAGISTRADA PONENTE. EN EL SENTIDO DE: CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO. CIUDAD DE MÉXICO A trece de agosto de dos mil veintiséis. DOY FE.

Cotejó EEBG/mahl

Se giraron los oficios 13636, 13637 y 13638, para notificar el auto que antecede.- Conste.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

163988054_0036000041581932005.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	ELIAS ELIAS BROWN GUERRERO		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.59.f3		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	19/08/26 20:46:44 - 19/08/26 14:46:44		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	4b 30 1d 97 e2 ca 14 3b 3c f7 40 9e 6c 10 21 e2 52 79 19 62 28 8d d3 3a 98 f6 36 cd 68 9f ed f1 66 de ea cc e4 bd d4 2d 21 1f 18 3f b9 35 b4 3f 23 f0 d4 e7 98 5a e2 71 37 84 f9 e7 ce 24 19 45 74 c1 d7 ea f1 e3 81 26 9b df b9 32 e1 29 fa 22 b9 74 58 f6 8c d2 a5 8a ce 2c 37 5c 5f f5 37 4d c2 e4 f2 c5 b4 d4 78 a0 23 e9 e3 29 7e f1 f4 e4 5f e2 2a 9d b9 83 18 b5 1f 94 d7 1d 5f 15 ab 68 69 9a ca 6d 0e 52 f5 a0 27 a5 67 76 a8 36 83 e0 7d 0c 29 9a 8f d4 42 78 b6 ef f9 60 db 5d 13 cf 85 d1 86 db d3 33 0d cd c7 a7 ab b4 42 96 cf 7a 30 db 44 90 e5 3f 9c 3c 68 4a 2c 76 c5 4d 99 7b 49 38 fa 77 48 5b 43 78 4b c7 73 8b 6a b9 8a 6f 1a 98 88 c0 ff 4f cd 09 55 57 9e c1 4b eb 12 3c f6 10 3f 4e 70 e6 04 15 64 64 5e 1d ca 09 bc 3f f0 ed e9 75 74 c8 b2 b3 bc 17 fa 4e 61 85 b1 f8 bd 55 f8 33 48 4e c1 0e 0d be f5 4d 67 9b ab 6d d1 5b 49 84 00 8b ed b1 5d 8d c1 77 7f 17 99 8b 21 2a 7c 6a ee bb 5c 49 61 0b 3b df e1 37 97 91 cd c8 58 76 f3 44 2f 15 2c 3c 21 78 3b d2 e6 57 af 33 fd 89 2b c4 00 84 a0 bb 29 8c a4 63 d3 50 a6 0d a4 e9 82 78 d2 e0 20 b0 10 a4 6b 85 68 11 37 47 05 00 6b 48 ea 7e 98 4d 98 ef 17 bc ee f7 7e 5b 72 1c 7b 23 a6 73 5e 6e b2 75 6b 33 67 f2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	19/08/26 20:46:44 - 19/08/26 14:46:44			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.59.f3			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	19/08/26 20:46:45 - 19/08/26 14:46:45			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	193707365			
Datos estampillados:	kpv0liVuIRKl/SSNmO69SJc9Bbl=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	KAREN LETICIA DE AVILA LOZANO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.67.89	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	20/08/26 15:50:56 - 20/08/26 09:50:56	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	1a 49 a7 0c 43 09 31 e3 27 1f a9 74 e8 c9 16 91 b4 df bc ec 26 df 43 58 f1 ec 20 c5 1e 88 c2 35 14 c5 80 e5 61 d3 e8 0c 96 0e 37 bb 2c 74 c0 65 1d 3e 2d fd 6b 37 4f ed 97 82 c7 9f 07 b8 0c 4c ea 6f 3c 68 02 5a 10 41 67 54 15 d9 0c 83 ae 90 b1 3e 71 b5 de 26 ee fb 38 6e f0 84 ec 2d 22 84 b8 1d 46 2d 1a 56 51 3f d8 c1 d2 e6 0d 8a dd 22 d2 71 55 f2 38 44 db 22 2f 0b 14 c2 8f cd 34 73 12 90 0e 54 7c 0e 9e cd 00 17 9e 03 c7 1d 6a 8f 80 7d 57 fb 48 89 d3 8e 07 0b 33 41 a2 0b 8d 0a c8 dc 9e 49 6e a1 60 5b 86 db d4 6e 7b 0f f7 55 b9 df 37 cf ae ee 3a 8e e1 e4 44 7b b3 7c 25 cf b3 c3 f8 bd cf 92 3c 03 31 92 4f be 08 a4 e4 1c d1 b2 a2 89 fd 0a 43 8d 16 dc 69 7b c2 f1 75 1c d7 19 16 76 e8 66 54 27 c2 a1 57 eb c1 37 4b 4a 20 b3 06 84 a9 07 22 69 dd 7e 37 14 24 ae 1f b6 db 32 21 fa 34 10 42 dc 30 f5 30 4f 04 98 5a 03 2e 98 5e 80 9d 07 49 b5 99 09 ac 6c 2b d9 b2 53 d0 0e 0c c5 75 0d 64 77 64 07 fe 60 3e 0d ee 3d 7b e0 fc 4a 4d 42 e9 9f bf d8 0a b3 10 d3 91 51 7d a0 08 4e cf 09 0e 31 c5 3f 5d 9c 7f 1c f8 30 99 5a 7e fc 33 0b 07 a5 50 fa 0a 3b e9 a4 33 3f 4f 77 0f 5f a5 5d 68 93 66 b5 d7 1f e3 03 9f 48 26 8f 6d 1b bf e4 13 bd 10 9a a4 c1 bd 8b 11 c8			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	20/08/26 15:50:56 - 20/08/26 09:50:56			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.67.89			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	20/08/26 15:50:57 - 20/08/26 09:50:57			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	194055740			
Datos estampillados:	IXemf9sYigAfJK96iq2aU1BRim8=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.58.db		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	20/08/26 17:27:28 - 20/08/26 11:27:28		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	1f ce 5c 8e d4 45 1d ae 51 df 9e 58 75 eb a6 af 73 cf ae f4 77 08 49 4b 01 2e f5 ba c4 f5 1a 2a dd 15 ee 68 cf fb f1 77 ca df b5 18 fd 9d 48 bd 65 55 69 d0 90 ec 77 c6 8d 0b 65 d9 ed a0 5f 90 c0 f1 c8 b1 e6 0f ee 7a 38 09 a7 5c 33 e0 72 d9 c4 10 72 14 a5 ba c4 f3 e1 de 06 f6 5f 7c df 2d af f1 9b d4 78 71 e5 36 90 93 1b 2a 9f fa 13 c1 84 d7 3f bb fe 14 d8 a1 6f ba b0 79 e3 29 f6 22 ba d6 2c 5d 7a eb 84 cc 24 8f aa c9 3d 52 80 45 bd ff 3c b2 0f f7 5a a4 d3 14 6b 11 6b 37 43 fc 3d 54 56 2e 21 a5 c5 e6 e9 49 05 c2 f0 82 50 ec 81 cc 1a 31 72 fd ad 96 43 a1 f4 ba f8 bf 94 75 8b f8 33 4a 5a 56 e5 26 89 78 7c 65 1d b5 7d 6b 2a 8e 24 3c 35 ca 27 56 27 c2 c2 54 9a 5f 76 cb bd 4a 79 01 59 22 43 08 c0 b9 e4 b4 07 d0 27 36 62 6b f1 bf e0 af d8 16 0a f9 e6 fc 11 47 9f 02 e1 cf 44 f8 6f 35 b2 cd 5f ca 87 1c 98 cf b8 d4 f7 4b e0 fa f5 be 6a 1d 29 ad ae 64 1c 71 fd 70 d1 f4 c6 a2 12 61 fd 04 df 2b e4 f3 3b b8 fc 9b 56 ce 3d e3 b8 73 8e 51 55 c5 b7 06 6c c7 2f 49 55 a1 53 1e b3 28 cd 51 24 7a 39 ca 33 c3 4e e9 e1 16 e0 34 c6 7d 11 03 50 90 0f d8 f6 ee 61 aa f4 3b 5f b0 a3 a0 3a a0 61 5b 2f 7b 4f d7 f1 36 20 41 3f 15 4a d4 f1 0f 5d 14 d7 cd e1 ef 83 b6			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	20/08/26 17:27:28 - 20/08/26 11:27:28			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.58.db			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	20/08/26 17:27:28 - 20/08/26 11:27:28			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	194149829			
Datos estampillados:	uvGW9eUqd6NTXrt9mF1+yhRcvio=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	RICARDO GALLARDO VARA		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.67.46		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	20/08/26 17:38:58 - 20/08/26 11:38:58		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	bd 56 73 03 75 77 47 52 e1 64 94 c7 a8 ea fc b1 3d 3b d3 a2 f9 1c 4d 8a 4c e7 12 77 3e eb e6 68 b7 91 ec 96 c5 31 4e 8c 71 37 38 0e 72 ef 1d 10 62 95 1e 5c 3e 32 7e 70 67 86 f7 87 28 ac 6d 9a 67 a0 d3 20 24 12 f3 0b 64 d7 db b2 d1 0d 3a 73 ed 68 e9 a8 f7 c8 1a 09 6f f7 34 df 95 d7 cd ad 18 9b 5d fc b7 bc 2e 91 29 e6 c8 27 59 d2 f8 94 70 9e 81 31 6c d4 dc 28 f0 15 e6 c2 31 e6 c8 4d 47 ce 80 05 6c ef 01 e5 f8 91 45 70 b5 b6 34 a7 59 a8 60 ad 6a ad b1 80 04 12 fb 9d a0 3e a0 17 05 73 b6 1f c6 93 95 43 24 37 0c 03 26 e0 3c 49 ba da cc d0 f7 b9 65 82 f7 52 e2 39 0a 62 99 a2 bf 69 1b 13 db 92 8c db f9 a8 40 d2 65 3c ce 0c 14 ed 74 d2 d6 66 46 2e ed 19 5d b2 d9 39 f9 f9 6a 66 15 c8 28 2a 1c 32 9e 80 86 93 ca 59 d4 bc 17 c0 9b ac c8 05 fa 3d 40 dc 3d 88 a6 90 6a 2b 77 83 ee ae 57 31 cc f6 74 3c e3 9e 1b 4b 42 3a 2e 20 e9 f1 64 78 28 5c fa 04 c6 9e 0d 41 28 85 1f eb df 94 ec b4 53 ac 0f ff b5 7f 69 5f 38 35 14 9f a5 b8 ed d8 dc 4b 75 58 68 36 18 cf 80 41 af 28 fd d8 53 69 e8 e3 b4 c1 59 3d ee 7c 90 f7 6f 71 dd 02 cf 00 5d e8 c2 0d ce 2e f5 9e b6 8e 0a d4 1e 13 4c 1c 19 21 a2 b1 16 72 76 db f6 08 42 90 31 85 a1 ed 93 9e 87 cd 7e f7 8d 88 33 39			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	20/08/26 17:38:59 - 20/08/26 11:38:59			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.67.46			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	20/08/26 17:38:59 - 20/08/26 11:38:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	194161596			
Datos estampillados:	eIKSAKB5Yq6kqAosxGo/Dig6l0o=			

El veinte de agosto de dos mil veintiseis, el licenciado Elias Elias Brown Guerrero, Secretario(a), con adscripción en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.